

**El caso Re (X)
y los sujetos
invisibles de la
vigilancia digital**

4 CANADÁ



Richard Mosley, juez federal canadiense. Foto: Couvrette/Ottawa

CANADÁ

El caso Re (X) y los sujetos invisibles de la vigilancia digital

el caso

A fines de 2013, el juez federal canadiense Richard Mosley emitió un fallo que sacudió a la sigilosa comunidad de seguridad nacional de Canadá.

Cuatro años antes, en 2009, el Servicio de Inteligencia y Seguridad Canadiense (CSIS) se presentó en una audiencia secreta *ex parte* ante el juez Mosley para solicitar un permiso para interceptar y monitorear las comunicaciones electrónicas de dos ciudadanos canadienses. El CSIS ya tenía una orden para vigilarlos dentro de Canadá; ahora el servicio pedía que se lo habilitara para trabajar con la Agencia de Seguridad en las Comunicaciones (CSE), la agencia de inteligencia de señales de Canadá, para monitorearlos cuando estaban fuera del país. Normalmente, la CSE no está autorizada legalmente para interceptar comunicaciones de canadienses, pero en el así llamado “mandato de asistencia” puede utilizar su equipo y experiencia para ayudar a otra agencia con una investigación autorizada. Los tribunales habían mostrado cierta cautela en la aprobación de estas operaciones conjuntas CSE-CSIS. Un intento anterior de obtener una orden judicial para operar en el extranjero había sido rechazada con el argumento de que la Ley CSIS, que define el alcance de las actividades y los poderes del CSIS, no autoriza investigaciones de inteligencia en el extranjero, en particular las que, debido a su naturaleza intrusiva, podrían violar leyes de otros países.¹ Pero ante el juez Mosley, el CSIS argumentó que esta solicitud era diferente: en este caso, la vigilancia de los dos objetivos se llevaría a cabo y se controlaría desde el interior de Canadá, lo que significaba que la información de vigilancia recolectada estaría sujeta a garantías legales. Mosley autorizó la orden judicial expresamente por esa garantía, y durante al menos un año el CSIS llevó a cabo la vigilancia electrónica de los dos individuos.

Todavía no se sabe quiénes eran estos “sospechosos”: ni sus nombres, ni su sexo, ni cualquier otro detalle sobre sus vidas. Tampoco conocemos la naturaleza de sus acciones que, al parecer, se consideraron lo suficientemente suspicaces como para asegurar la

orden de vigilancia interna en primer lugar. El carácter secreto de los casos de seguridad nacional que requieren órdenes judiciales invisibiliza a los sujetos. El proceso se lleva a cabo con tanto secretismo que lo más probable es que quienes estén siendo vigilados nunca se enteren de ello. Y, a diferencia de la vigilancia relacionada con las investigaciones criminales, no es obligatorio que nadie por fuera de estos procedimientos ocultos sepa que se produjo el espionaje. En pocas palabras, los canadienses rara vez saben que están siendo sometidos a vigilancia electrónica, o por qué.

Para asegurar una orden judicial como la que se le pidió al juez Mosley, el CSIS tiene que convencer al tribunal de que la operación de vigilancia prevista es necesaria y proporcionada y que se llevará a cabo conforme a la ley, incluida la Carta Canadiense de Derechos y Libertades. Pero debido a que los procedimientos son secretos, y porque tienen muy poco control externo o supervisión, los jueces que oyen estas solicitudes dependen de la información que los mismos servicios de seguridad proveen, y son totalmente incapaces de evaluar si estos retienen información. El juez Mosley aceptó la solicitud de 2009 para vigilar a los dos sospechosos fuera de Canadá porque estaba convencido de que, al garantizársele que la vigilancia sería recolectada y controlada desde dentro de Canadá, el CSIS y la CSE aseguraban que las comunicaciones privadas de los canadienses interceptados se utilizarían solo si eran esenciales para fines de seguridad nacional. Fue un importante precedente para el CSIS: en los siguientes cuatro años, el Tribunal Federal emitió 35 órdenes similares en base a la decisión del juez Mosley.²

Después, en junio de 2013, Mosley leyó algo que le pareció alarmante.

Cada año, la CSE es revisada por un comisionado de la CSE, por lo general un juez retirado que es designado para examinar sus actividades y evaluar si cumple con la ley, y para investigar cualquier queja contra la agencia. El comisionado de la CSE debe escribir un informe sobre esa revisión. La versión pública del informe es extremadamente prudente y

“

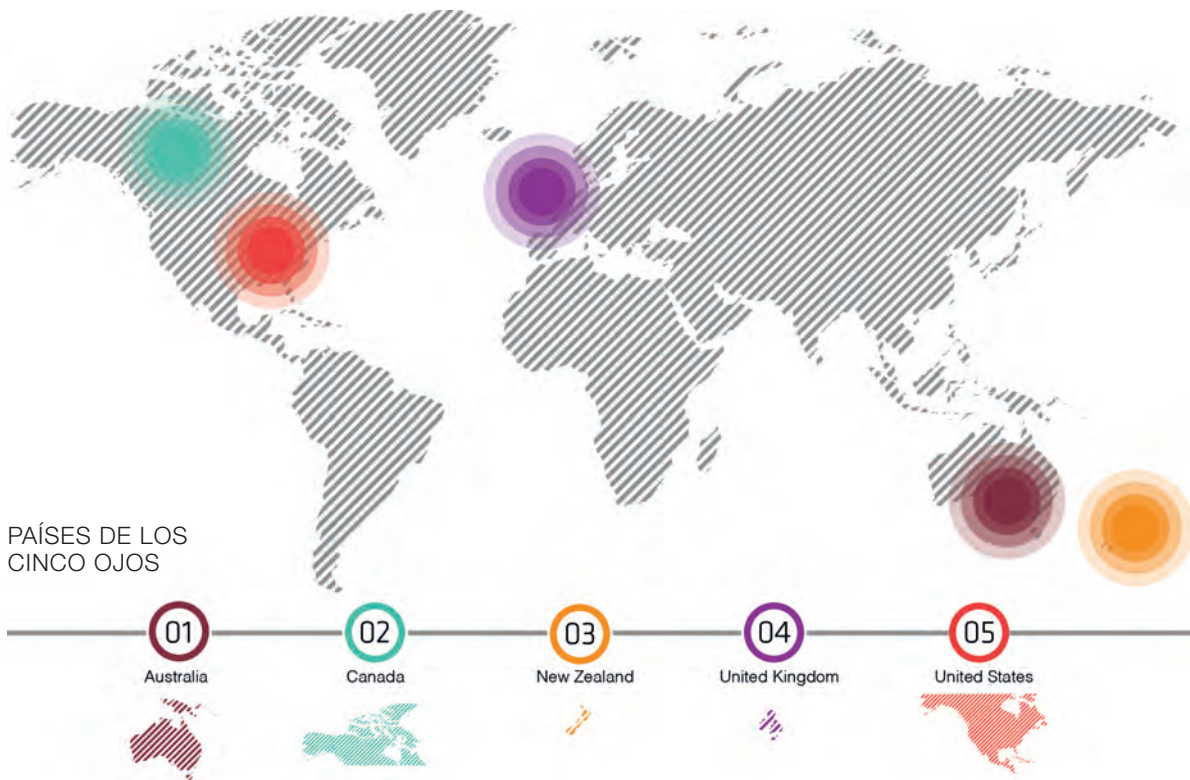
El juez Mosley emitió una sentencia pública contundente del caso, que se había dado a conocer como *Re (X)*, declarando enfáticamente que el Servicio de Inteligencia de Canadá y sus asesores legales habían cometido ‘un incumplimiento del deber de sinceridad debida a la corte’.

”

cuidadosamente redactada para revelar muy poco sobre el funcionamiento real de la CSE, y rara vez atrae la atención más allá de un pequeño círculo de estudiosos y observadores de la política. Pero para el juez Mosley, algo saltó a la vista: en una discusión sobre el tipo particular de orden judicial que él había aprobado, el comisionado recomendaba que la CSE le dijera a su socio CSIS que “proveyera a la Corte Federal de Canadá de cierta evidencia adicional sobre la naturaleza y el alcance de la asistencia que la CSE puede brindar a CSIS”.³

La recomendación encendió las alarmas de Mosley: sugería que había algo que el tribunal –y, por extensión, él mismo– necesitaba saber acerca de cómo se estaban utilizando las órdenes judiciales que había concedido inicialmente. Decidió entonces tomar la inusual medida de llamar a los abogados del CSIS y la CSE para que se presentaran ante él y le explicaran qué era exactamente lo que estaba pasando. Específicamente, quería saber si había información o pruebas que le hubiesen sido retenidas durante la solicitud de la orden judicial, y si estas hubieran hecho una diferencia en su decisión de emitir la orden y permitir la vigilancia.

Puesto que tales procedimientos también son secretos, no conocemos todos los detalles de ese encuentro, o de las audiencias posteriores que el juez Mosley pidió en base a lo que descubrió ese día. Sin embargo, la versión pública del documento que resume los procedimientos reveló que la CSE no fue la única agencia que recolectaba información sobre los dos individuos vigilados; y que había pedido a sus homólogos de otros organismos, sus aliados de los Cinco Ojos, ayuda para llevar a cabo la vigilancia electrónica digital. Esto violaba claramente la letra y el espíritu de las garantías originales de la CSE. La orden fue concedida bajo el entendimiento específico de que el CSIS y la CSE controlarían la información sobre los dos objetivos canadienses, y de que la información reunida se quedaría en Canadá. Esa garantía era crucial. Cuando la información se recolecta y se conserva en Canadá, está protegida por las leyes



canadienses y es utilizada solo para los intereses de Canadá. Cuando es recolectada por otros, no existen tales protecciones. Hay acuerdos –de nuevo, completamente secretos– entre los aliados que se supone regulan este tipo de recolección e intercambio de información, pero no hay ninguna garantía de que esos acuerdos se respetarán si otro país decide que es de interés nacional utilizar la información reunida en operaciones conjuntas para sus propios fines.

El documento también revelaba que la omisión del CSIS y la CSE de su intención de pedir ayuda de aliados no fue accidental. Por el contrario, el empleado de la CSE que se presentó ante el juez admitió explícitamente que la presentación inicial había sido cuidadosamente “moldeada” con un asesor legal para dejar de lado la mención de terceras partes a las que se les podría pedir ayuda con la vigilancia.

Cerca del final de 2013, el juez Mosley emitió una sentencia pública contundente del caso, que se había dado a conocer como *Re (X)*, declarando enfáticamente que el Servicio de Inteligencia de Canadá y sus asesores legales habían cometido “un incumplimiento del deber de sinceridad debida a la corte”. Denunciando el engaño del Servicio, Mosley escribió que “la corte debe estar preocupada de que la autoridad que le otorga el Parlamento para autorizar actividades de investigación intrusiva del Servicio pueda ser percibida en el ámbito público como una aprobación para vigilar e interceptar las comunicaciones de la población canadiense por parte de agencias extranjeras”.⁴

El gobierno apeló la decisión de Mosley, pero el Tribunal Federal de Apelación confirmó la sentencia en julio de 2014. El CSIS se preparó para llevar su caso al Tribunal Supremo de Canadá, alegando que “el CSIS debe ser capaz de llevar a cabo su importante papel de recolección de inteligencia sobre amenazas a la seguridad de Canadá confiando en que está actuando dentro de la ley, y la población también tiene derecho a conocer qué limitaciones se le imponen al CSIS en este sentido”. La Canadian Civil Liberties Association (CCLA) se preparó para presentar una moción para intervenir en esta apelación en nombre del interés público. Pero en 2015, el Parlamento canadiense aprobó dos proyectos de ley, C-51 y C-44, concediendo explícitamente al CSIS mayores poderes para vigilar fuera de Canadá. Como muchas de las cuestiones jurídicas cruciales dejaron de tener sentido a causa de las nuevas leyes, el gobierno retiró su apelación del caso *Re (X)* ante la Corte Suprema, lo que supone, al final, una rara derrota del gobierno y una oportunidad aún más rara para que las prácticas de vigilancia de Canadá fueran puestas bajo escrutinio público.

el contexto

Gracias a los esfuerzos de Edward Snowden y de otros informantes, contamos con mucha más información de la que alguna vez tuvimos acerca de las capacidades de las agencias de inteligencia de Canadá, y las formas en que el aparato de seguridad nacional canadiense trabaja con Estados Unidos, Reino Unido, Australia y



Maher Arar inclina la cabeza durante una conferencia de prensa a propósito de la disculpa y compensación del gobierno canadiense, Ottawa, el 26 de enero de 2007. Arar fue errónea e injustamente deportado a Siria, donde fue detenido y torturado. Foto: Tom Hanson/AP

Nueva Zelanda –sus socios internacionales en la alianza de los Cinco Ojos. Por ejemplo, por un memorando altamente confidencial publicado por Snowden, sabemos que la CSE ofrece “acceso geográfico único a áreas inaccesibles para los EE.UU.” y ha “abierto sitios secretos a petición de la NSA”. La NSA, a cambio, comparte tecnología de “recolección, procesamiento y análisis, y capacidades para asegurar la información”.⁵ Según una estimación, participar en los Cinco Ojos le da a Canadá acceso a una “asociación global de un valor de 15 mil millones de dólares canadienses”, ampliando sensiblemente su capacidad de vigilancia.⁶

Cuanto más sabemos acerca de las capacidades técnicas de los servicios de inteligencia canadienses y de sus socios de los Cinco Ojos, parece más probable que el intercambio de información a través de las fronteras se utilice para eludir la legislación canadiense. Mientras que el CSIS no puede acceder a las comunicaciones de los canadienses dentro de Canadá sin una orden judicial,⁷ y a la CSE se le prohíbe dirigir sus actividades hacia los canadienses salvo excepciones,⁸ los organismos aliados no tienen prohibiciones en sus leyes que les impidan vigilar a los canadienses. Por el contrario, las comunicaciones exteriores son el blanco típico de la vigilancia, y ha habido sospechas –y de vez en cuando pruebas–, de que los aliados recolectan intencionadamente información unos de otros y luego encuentran maneras de compartirla –como cuando la inteligencia británica compartió voluntariamente con la NSA información recopilada a través del programa “Tempora”, tal como informó el periódico *The Guardian*.⁹

El gobierno canadiense insiste en que los acuerdos entre los socios de espionaje prohíben este tipo de arreglos, pero no hay suficiente transparencia para confiar en tales garantías, y parece poco probable que Canadá pueda permanecer totalmente desacoplada de las actividades practicadas por sus aliados más cercanos. De hecho, el entonces comisionado de la CSE Robert Décary indicó de manera explícita en un informe recientemente desclasificado que no puede determinar si los socios de los Cinco Ojos cumplen con sus promesas de proteger la información acerca de los canadienses. Lo que encontró fue que más allá de “ciertas declaraciones y garantías generales” entre la CSE y sus socios, era “incapaz de evaluar en qué medida” los Cinco Ojos siguen los acuerdos con la CSE y protegen las comunicaciones privadas y la información sobre los canadienses que la CSE comparte con sus socios”.¹⁰

Los canadienses tienen buenas razones para temer el intercambio de inteligencia entre los socios de los Cinco Ojos. En septiembre de 2002, Maher Arar, un ciudadano con doble nacionalidad sirio-canadiense, fue interceptado en el aeropuerto JFK de Nueva York en su camino de regreso a Canadá tras unas vacaciones familiares. Primero fue detenido en Estados Unidos bajo sospecha de que pertenecía a Al Qaeda, y posteriormente fue entregado por los Estados Unidos a Siria, donde fue torturado. Una comisión de investigación canadiense determinó que era una víctima inocente y que los inexactos informes de inteligencia y comunicaciones que los servicios de inteligencia de



Un vehículo pasa delante de la oficina central del Servicio de Inteligencia y Seguridad Canadiense (CSIS) en Ottawa, el 5 de noviembre de 2014.
Foto: Reuters/Latinstock

Canadá habían compartido con Estados Unidos, sin chequeo ni reservas apropiadas, condujeron al error. Por otra parte, al darle la información a Estados Unidos, la inteligencia canadiense había perdido el control tanto de la información como de la capacidad de influir en las acciones de su socio. Canadá, finalmente, se disculpó con el señor Arar y llegó a un acuerdo económico sustancial por su complicidad en su entrega y tortura, pero ninguna disculpa ni cantidad de dinero pueden reparar el daño que se le hizo a su vida.

Las historias de vigilancia más impresionantes refieren a personas –gente real, específica, con familiares, amigos, empleos– que han vivido la experiencia personal de ser vigiladas y que pueden hablar de los efectos que la vigilancia ha tenido en sus vidas, de las oportunidades de viaje o de trabajo perdidos, de los familiares implicados o amenazados, y de la sensación de violación y el miedo que engendra ser observado. Son historias que muestran el profundo costo humano de las leyes y prácticas que subvierten los derechos individuales en nombre de la seguridad nacional. También suelen ser historias que salen a la luz debido a que los individuos se dieron cuenta de que estaban siendo observados, a menudo porque la información obtenida por los vigilantes fue utilizada de una manera que dañó a estas personas –por entrar a una lista de exclusión aérea, prohibirle un cruce de frontera o, en casos extremos como el de Maher Arar, experimentando la entrega y la tortura.

Pero el caso *Re (X)* nos recuerda que mucha gente no sabrá nunca que está siendo observada, nunca sabrá que su privacidad está siendo tan profundamente invadida y, al final, puede que nunca llegue a ser detenida o acusada de un delito de terrorismo. Es bastante probable que haya muchos, muchos casos en los que la vigilancia sea errónea o esté injustificada –o, como en el caso *Re (X)*, se despliegue bajo órdenes judiciales basadas en hechos manipulados– y que no llamen la atención ni generen ninguna protesta porque quienes están siendo vigilados permanecen en la invisibilidad.

Edward Snowden ha descrito los mecanismos de Canadá para regular y controlar la vigilancia de sus agencias de inteligencia como “uno de los marcos de supervisión más débiles de cualquier agencia de inteligencia occidental del mundo”.¹¹ Si no hubiera sido por un juez que defendió la integridad de la orden judicial secreta, los canadienses todavía no sabrían que dos de sus conciudadanos habían sido arrastrados por la red de vigilancia digital transnacional. El juez Mosley quiso revisar su decisión de emitir la orden judicial solo porque estudió el informe anual del comisionado de la CSE, en el que daba a entender que había algo en la forma en que la CSE estaba colaborando con el CSIS que el Tribunal Federal necesitaba saber. Para entonces, habían transcurrido cuatro años desde la emisión de la orden original, y esa orden, establecida sobre la base de información engañosa, había servido como precedente para asegurar muchas otras órdenes similares.

“

Re (X) nos recuerda que el secretismo que las agencias de inteligencia necesitan para realizar su trabajo debe complementarse con mecanismos apropiados para rendir cuentas y proteger a la población frente a abusos y errores.

”

conclusión

El juez Mosley defendió la ley y a los canadienses que están protegidos por ella. Su valentía e iniciativa ayudaron a visibilizar y salvaguardar a algunos de los sujetos invisibles de la vigilancia de seguridad. Desafortunadamente, el conocimiento no ha conducido a la reforma en Canadá. En lugar de responder al caso *Re (X)* y los problemas que plantea mediante la revisión y restricción de la autoridad legal de las agencias y agentes de seguridad canadienses para actuar fuera de Canadá, el gobierno aprobó dos proyectos de ley, el C-44 y el C-51, que amplían la autoridad de los organismos de inteligencia.

El proyecto C-51, la más radical de estas medidas, se introdujo en enero de 2015 y recibió sanción efectiva en junio siguiente; una progresión muy rápida para un proyecto de ley que hace grandes cambios a la ley de seguridad nacional de Canadá. En el caso particular de los términos de vigilancia, la ley C-51 permite un aumento exponencial del intercambio de información entre organismos e instituciones gubernamentales y potencialmente también con poderes extranjeros, sin reforzar las medidas de transparencia. Además da al CSIS nuevos poderes para llevar adelante acciones encubiertas, incluso acciones que van en contra de las leyes internacionales, una vez más, sin supervisión adicional. Que el proyecto de ley haya sido aprobado tan rápidamente es desconcertante dada la intensidad de las reservas y críticas recibidas, no solo por parte de la sociedad civil, sino por expertos en derecho jurídico y civil, prominentes funcionarios públicos, académicos, antiguos jueces del Tribunal Supremo y ex primeros ministros de Canadá, y dado el hecho de que el apoyo público pasó de una mayoría a favor cuando se introdujo el proyecto de ley, a una mayoría en contra cuando las características de la nueva ley se difundieron. La CCLA fue activa en los debates en torno a la ley C-51, argumentando que es fundamentalmente defectuosa e inconstitucional en secciones específicas, y que no hay ninguna evidencia de que los grandes cambios que introduce para distintos poderes de inteligencia –incluyendo posibilidades ampliadas de vigilancia– sean siquiera necesarios.¹² La CCLA se centra ahora en prevenir que esta legislación sea utilizada para privar a las personas de sus derechos, protegidos en nuestra *Carta de Derechos y Libertades*, y ha presentado una solicitud ante la Corte Superior de Ontario para que ciertas disposiciones de la ley antiterrorista C-51 de 2015 sean declaradas inconstitucionales.

Ciertamente no debería haber ninguna ampliación de las competencias digitales de vigilancia e intercambio de inteligencia en Canadá sin estructuras nuevas y más eficaces de supervisión. *Re (X)* nos recuerda que el secretismo que las agencias de inteligencia necesitan para realizar su trabajo debe complementarse con mecanismos apropiados para rendir cuentas y proteger a la población frente a abusos y errores. Los informes anuales cuidadosamente redactados por órganos consultivos, y de vez en cuando complementados por

documentos censurados obtenidos por periodistas en respuesta a una petición FOIA, simplemente no son suficientes. *Re (X)* también pone de relieve la necesidad de que los tribunales y otras autoridades de supervisión tengan acceso suficiente a la información sobre las operaciones de inteligencia en general y sobre las peticiones específicas de vigilancia, con el fin de comprobar la veracidad de las declaraciones y afirmaciones que hacen los servicios de seguridad en las solicitudes de vigilancia. En la medida en que sea posible, esa información debe hacerse pública, y se debe desafiar la retórica oficial, que a menudo intenta convencernos de que cuanto más información se recolecta y se comparte, más seguros estaremos, y contrarrestarla con la advertencia de que es peligroso para nosotros compartir demasiado con las personas equivocadas. Debemos asegurarnos de que la promesa de que nuestras agencias de inteligencia actúan proporcional y legalmente esté respaldada por leyes fuertes y apropiadas que rijan la recolección e intercambio de información. Por último, debemos asegurarnos de que todas las leyes que rigen a nuestras agencias nacionales de seguridad y sus actividades reflejen –no rechacen– nuestras garantías del derecho humano al debido proceso, a la intimidad y a la dignidad de cada individuo.

notas

-
1. Para una descripción detallada de las complejidades legales de las sentencias, véase Craig Forcece, "Triple Vision Accountability and the Outsourcing of CSIS Intercepts" (6 de diciembre, 2013). Disponible en: <http://craigforcece.squarespace.com/national-security-law-blog/2013/12/6/triple-vision-accountability-and-the-outsourcing-of-csis-int.html> [28/10/2016].
2. Comité de Revisión de Inteligencia de Seguridad. *SIRC Annual Report 2012–2013: Bridging the Gap*, p. 18. Disponible en: <http://www.sirc-sars.gc.ca/anrran/2012-2013/index-eng.html> [28/10/2016].
3. Robert Décarý. *Communications Security Establishment Commissioner: 2012-2013 Annual Report*. Disponible en: <https://www.ocsec-bccst.gc.ca/s21/s46/s18/eng/2012-2013-annual-report> [28/10/2016]. Nótese que la Agencia de Seguridad en las Comunicaciones (CSE) se llamaba entonces Agencia de Seguridad en las Comunicaciones Canadá (CSEC).
4. 2013 FC 1275, párr. 97.
5. Agencia Nacional de Seguridad/nota de información del Servicio Central de Seguridad, "Relación de Inteligencia de la NSA con la Agencia de Seguridad en las Comunicaciones (CSEC)" (2013). Disponible en el Archivo Snowden en: <https://snowdenarchive.cjfe.org/greenstone/collect/snowden1/index/assoc/HASH1ee3.dir/doc.pdf> [28/10/2016].
6. Canadá, Parlamento, Senado, Comité del Senado sobre Seguridad y Defensa [SSCNSD] (2012). Transcripción de Procedimientos. 41° Parl., 1° ses. Meeting No. 15. Disponible en: http://www.parl.gc.ca/Content/SEN/Committee/411/secd/10ev-49784-e.htm?Language=E&Parl=41&Ses=1&comm_id=76 [28/10/2016].
7. Canadian Security Intelligence Service Act (R.S.C., 1985, c. C-23), Sección 21. Disponible en: <http://laws.justice.gc.ca/eng/acts/C-23/> [28/10/2016].
8. National Defence Act (R.S.C., 1985, c. N-5), Sección 273.64 (2)(a). Disponible en: <http://laws.justice.gc.ca/eng/acts/n-5/fulltext.html> [28/10/2016].
9. "GCHQ taps fibre-optic cables for secret access to world's communications", *The Guardian* (21 de junio, 2013). Disponible en: <http://www.theguardian.com/uk/2013/jun/21/gchq-cables-secret-world-communications-nsa> [28/10/2016].
10. "CSEC commissioner calls for safeguards on Five Eyes data sharing", *The Canadian Press* (14 de julio, 2014). Disponible en: <http://www.cbc.ca/news/politics/csec-commissioner-calls-for-safeguards-on-five-eyes-data-sharing-1.2706911> [28/10/2016].
11. Edward Snowden. Entrevista de CBC News video (4 de marzo, 2015). Disponible en: <http://www.cbc.ca/news/canada/edward-snowden-says-canadian-spying-has-weakest-oversight-in-western-world-1.2981051> [28/10/2016].
12. En apoyo a la CCLA en los debates sobre la Ley C-51, ocho miembros de INCLO firmaron una carta conjunta que fue presentada a la Comisión del Senado el 23 de abril, para mostrar apoyo internacional a la posición de la CCLA y hacer hincapié en la importancia de la Ley Internacional de Derechos Humanos y los derechos a la privacidad en las iniciativas mundiales antiterroristas.

Un vistazo a la vigilancia en Canadá

¿Los ciudadanos saben más ahora que hace tres años acerca de las actividades de vigilancia del gobierno?

Sí.

¿Las revelaciones de Snowden condujeron a un debate público significativo en su país acerca de los límites adecuados de la vigilancia gubernamental?

No (académicos, la sociedad civil e individuos los discutieron pero el gobierno aprobó una legislación ampliando los poderes de vigilancia).

Después de las revelaciones de Snowden, ¿ha habido otros informantes que hayan decidido filtrar información al público acerca de la vigilancia gubernamental?

No.

En los últimos tres años, ¿las autoridades a cargo de la vigilancia de seguridad nacional gubernamental se han reducido, han aumentado o ninguna de las dos opciones?

Han aumentado.

En los últimos tres años, ¿se han impuesto nuevos controles estructurales sobre los servicios de inteligencia (por ejemplo, nuevos requisitos de transparencia)?

No.

Si el poder legislativo/Parlamento considerara una nueva legislación sobre vigilancia gubernamental, ¿dicha legislación restringiría o ampliaría su poder de vigilancia?

La legislación más reciente bajo el anterior gobierno canadiense (proyecto de ley C-51, Ley contra el terrorismo, 2015) amplió los poderes de vigilancia; a partir de octubre de 2015 tenemos un nuevo gobierno cuya plataforma sugiere que puede reducir estos poderes, pero aún no está del todo claro qué va a hacer, ya que también apoyó la legislación original.

Si el poder legislativo/Parlamento considerara una nueva legislación relativa a la vigilancia del gobierno, ¿dicha legislación impondría nuevos controles estructurales?

Hay indicios de que lo hará, sí.

Durante los últimos tres años, ¿las autoridades a cargo de la vigilancia de seguridad nacional del gobierno han sido objeto de litigio interno, incluso en los tribunales constitucionales?

Sí.

Durante los últimos tres años, ¿los tribunales han rechazado algún aspecto de la vigilancia gubernamental por ser incompatible con la Constitución y los derechos humanos?

No. Sin embargo, la CCLA tiene un recurso de inconstitucionalidad activo ante la Corte Superior de Justicia de Ontario.

Durante los últimos tres años, ¿cree que la población ha llegado a confiar más, menos o no ha modificado su percepción sobre las agencias de inteligencia?

Menos.